De pensiones, vivienda y garantia de calidad democrática de las instituciones: 29N.

Dr Carlos Ramírez

La mayoría del PP en el Senado une a una izquierda irreconciliable en el Congreso. El PSOE y el llamado Frente Amplio han pactado en secreto sus candidaturas conjuntas para el 29-N en torno a 40 provincias, con Cataluña y Canarias fuera del acuerdo estatal general.

Si Pedro Sánchez gana las elecciones será porque una porción importante de los votos que consiga procederán de la extrema izquierda. Es muy posible que Pedro Sánchez consiga votos de todos los partidos que están a su izquierda, incluidos los independentistas. Solo habrá dos opciones: o es presidente Pedro Sánchez o lo es Alberto Núñez Feijóo con Abascal de vicepresidente.

El presidente ha apuntado como ejes la defensa del acceso a la vivienda y de una justicia "imparcial". Increible pero cierto.

En Moncloa creen que pueden reunir apoyos entre las formaciones de izquierda y el PNV sin depender de Junts, cuyos votos fueron determinantes para bloquear algunas de las últimas iniciativas del Ejecutivo. La aprobación de cada medida dependerá, no obstante, de su contenido y de las negociaciones con los grupos de ese órgano. Otro de los anuncios con más carga política será la subida del salario mínimo interprofesional que prepara el departamento de Yolanda Díaz, en torno al 5%. Mientras, desde el 30 de julio a la fecha aun quedan 15.000 marroquies en Ceuta de los 80.000 que invadieron la ciudad.

PP y Vox negocian un acuerdo electoral para el Senado que puede alterar el equilibrio de poder de la próxima legislatura que permitiría a la derecha alcanzar una mayoría cualificada de tres quintos. La operación tiene un beneficio aritmético evidente, pero también costes políticos muy diferentes para las dos formaciones.

Esta mayoría de tres quintos en el Senado permitiría al PP y Vox reforzar decisivamente su capacidad de influencia sobre los órganos constitucionales. Con esa mayoría cualificada, la derecha podría elegir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Senado, aunque los candidatos deben proceder de propuestas de los parlamentos autonómicos. También podría elegir a los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial que corresponden a la Cámara Alta, seis de procedencia judicial y cuatro juristas de reconocida competencia. Asimismo, la operación tendría también consecuencias en territorios dominados por las fuerzas nacionalistas e independentistas. En Álava, la derecha obtendría un senador a costa de EH Bildu. En Barcelona, Lérida y Tarragona conseguiría representación y dejaría a ERC sin sus actuales escaños. No obstante, la coalición PSOE-

Frente Amplio seguiría por delante de la derecha en Álava, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa, Lérida, Tarragona y Gerona. En Vizcaya, la concentración del voto de la izquierda permitiría arrebatar dos senadores al PNV. En Guipúzcoa, los socialistas y sus aliados también se beneficiarían de la pérdida del único representante nacionalista.

El PP sería el principal beneficiario de la concentración del voto, pero también asume el desgaste de formalizar una colaboración electoral con Vox antes de las generales. La coordinación de candidaturas, incluso sin una coalición formal, ofrece al PSOE argumentos para presentar a ambas formaciones como un bloque político inseparable. En todo caso, la negociación también responde a una presión electoral objetiva.

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, ha prometido auditar las cuentas públicas si llega a la Moncloa, pero si la mochila real es peor de la que declara Sánchez, tensionará aún más los mercados. Ya sucedió en el pasado. ¿ Como es posible que no conozcan las cuentas del Estado?. Es posible que haya déficit oculto tras cuatro años sin presupuestos en los que, además, el Instituto Nacional de Estadística ha hecho revisiones al alza del PIB en los últimos años. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Banco de España dan por seguro que conducirán a un incumplimiento de la regla europea de gasto y acercan la obligación de adoptar medidas de "ajustes".

Si, además, esos datos son peores en realidad España no será inmune a la actual tensión en los mercados de deuda, por eso el Tesoro tiene que retribuir con más del 4% de interés por el bono a 10 años, cuando le bastaba el 3% a principios de año. AIReF resalta en su último Observatorio de Deuda que, en un supuesto de aumento de la tensión, el gasto por intereses pasaría a ser en 2030 de entre 67.200 y 73.200 millones de euros, frente a 58.300 millones en el escenario base, implicaría detraer recursos de otras partidas, como el gasto social o el militar, para pagar el servicio de la deuda.

¿Hay precedentes de déficit oculto que aflora tras un cambio de Gobierno? Demasiados, y afectan a los dos grandes partidos. En 1996, el entonces nuevo Gobierno de Aznar afloró lo que llamaron "facturas en los cajones" y el déficit público de 1995 se cerró en el 6,79%, frente al 5,87% declarado por el de Felipe González. Lo peor llegó en 2012. El déficit público legado por el Gobierno de Zapatero fue finalmente del 9% en 2011, muy superior al 6% comprometido por su ministra Elena Salgado. El nuevo dato, revelado por Cristóbal Montoro, aumentó la desconfianza de los mercados y acentuó la presión sobre la prima de riesgo de España.

España atraviesa una crisis de vivienda sin precedentes recientes, con un déficit acumulado de 750.000 inmuebles, millones de ciudadanos

afectados por el encarecimiento de los precios y una generación de jóvenes que encuentra cada vez más dificultades para emanciparse.

Un nuevo informe del Foro Regulación Inteligente (FRI), titulado "Los 61.700 millones que no fueron casas", calcula que esta financiación habría permitido impulsar alrededor de 440.700 viviendas de alquiler asequible si se hubiese canalizado mediante fórmulas de colaboración público-privada similares a las desarrolladas por la Comunidad de Madrid. La dimensión de la renuncia resulta especialmente llamativa cuando se examinan las cifras del Plan de Recuperación. España tenía asignados aproximadamente 163.000 millones de euros entre transferencias no reembolsables y préstamos, pero cerrará el programa con 101.300 millones, dejando sin utilizar el 38% de los recursos inicialmente disponibles. Los 61.700 millones descartados corresponden íntegramente al capítulo de préstamos. Según los datos recogidos por el FRI a partir de las estimaciones del Banco de España, entre 2021 y 2025 se ha acumulado un déficit de unas 750.000 viviendas porque el ritmo de creación de hogares ha superado ampliamente al de la construcción. Solo durante 2025 se formaron aproximadamente 240.000 nuevos hogares, frente a unas 92.000 viviendas terminadas. Es decir, por cada inmueble nuevo que se incorporó al parque residencial aparecieron más de dos nuevos hogares. El informe considera que España lleva años construyendo menos viviendas de las necesarias y la diferencia entre hogares creados e inmuebles disponibles continúa ampliándose.

El 95,7% del territorio español figura clasificado como no urbanizable y la transformación de suelo rústico en parcelas aptas para construir puede exigir entre 10 y 15 años de trámites. La presión tributaria tampoco resulta irrelevante: las distintas administraciones recaudan alrededor de 52.200 millones de euros anuales mediante figuras fiscales vinculadas al mercado residencial, mientras que los impuestos representan aproximadamente una cuarta parte del precio final de una vivienda nueva. Frente a este escenario, el FRI plantea un ejercicio económico basado en la experiencia del Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

Mientras 2,6 millones de españoles no pueden permitirse comer carne o pescado dos veces a la semana. En cambio, las ganancias patrimoniales por vivienda se multiplican por casi tres veces en cuatro años para los ciudadanos más adinerados

España, subida al pódium de las economías con mayor crecimiento los últimos tres años, tienen el dudoso honor de ser el quinto país de los 27 que conforman la Unión Europea con un mayor porcentaje de la población en riesgo de pobreza. Afecta a uno de cada cuatro españoles, una tasa solo superada por Bulgaria, Grecia, Rumanía y Lituania. En este contexto de bonanza económica, existen en nuestro país 9,56 millones de españoles que viven en una situación de pobreza. Son

medio millón de personas más que en plena crisis financiera en 2008. La población que se encuentra en pobreza severa alcanza al 8%, con más de 3,94 millones de ciudadanos, medio millón más también que 17 años atrás.

Mientras el gas natural europeo ha disparado su precio un 180% desde que el 28 de febrero EEUU atacara por primera vez Irán. El cierre del estrecho de Ormuz también ha impactado a lo que cuesta llenar el depósito de gasolina. La referencia cotizada que se utiliza para determinar el precio del diésel está en zona de máximos y sin previsión de bajar, no solo por la guerra en Oriente, sino porque el conflicto con Rusia está provocando también la destrucción de refinerías y que Putin haya decidido limitar las exportaciones.

Y tras la precaria tregua sobre Groenlandia, las últimas maniobras de Donald Trump para frenar la escalada energética y evitar una sangría electoral el próximo 3 de noviembre han vuelto a tensar al límite las relaciones entre EEUU y la UE. En lugar de apretar las tuercas a Putin, como reclaman los europeos, Washington ha restringido el acceso de sus fuerzas a los satélites Starlink, vitales para su defensa, y amenaza con bloquear el suministro de armas estadounidenses que financian los europeos a través del programa PURL de la OTAN. El 4 de noviembre se decide el futuro de Trump y la posibildidad del ansado impichmment de una mayoria democrata obsesinada con él presidente.